

RESOLUCIÓN Nro. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-2022-0262

PEDRO GERMÁN BRITO LÓPEZ
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO SUBROGANTE

CONSIDERANDO:

- Que,** el Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332, de 12 de septiembre de 2014, tiene por objeto regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador;
- Que,** el numeral 1 del artículo 62, en concordancia con el inciso segundo del artículo 74 del Libro 1 del Código ibídem, en su parte pertinente, determina como función de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ejercer la vigilancia, auditoría, control y supervisión de las disposiciones de dicho Código y de las regulaciones dictadas por la Junta de Política y Regulación Financiera, en lo que corresponde a las actividades financieras ejercidas por las entidades;
- Que,** el numeral 7 del artículo 62 del aludido Código, establece como función de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las entidades sujetas a su control y, en general, vigilar que cumplan las normas que rigen su funcionamiento, las actividades financieras que presten, mediante la supervisión permanente, preventiva, extra situ y visitas de inspección in situ que permitan determinar la situación económica y financiera de las entidades, el manejo de sus negocios, evaluar la calidad y control de la gestión de riesgo y verificar la veracidad de la información que generan;
- Que,** acorde con el inciso final del artículo 62 del mencionado Código: *“La superintendencia, para el cumplimiento de estas funciones, podrá expedir todos los actos y contratos que fueren necesarios. Asimismo, podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales ni las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Financiera.”*;
- Que,** los incisos tercero y quinto del artículo 74 ejusdem, sustituido por el artículo 52 de la Ley Orgánica Reformativa al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 443 de 3 de mayo de 2021, determinan:

“La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en su organización, funcionamiento y funciones de control y supervisión del sector financiero popular y solidario, se regirá por las disposiciones de este Código y la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, además de las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, tendrá las funciones determinadas en los artículos 71 y 62 excepto los numerales

19 y 28, y el numeral 10 se aplicará reconociendo que las entidades de la economía popular y solidaria tienen capital ilimitado. Los actos expedidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria gozarán de la presunción de legalidad y se sujetarán a lo preceptuado en la normativa legal vigente, respecto de su impugnación, reforma o extinción.”;

Que, el inciso primero del artículo 280 del aludido Código, establece: *“Los organismos de control previstos en este Código, en el ámbito de sus competencias, están obligados a efectuar un proceso de supervisión permanente de acuerdo al perfil de riesgo de la entidad, in situ y/o extra situ, observando los más altos estándares internacionales de supervisión preventiva, prospectiva y efectiva, manteniendo los principios de: independencia, universalidad de las actuaciones, continuidad en el proceso de supervisión, integralidad, previsión y suficiencia a las entidades financieras, que permita determinar la situación económica y financiera de las entidades, el manejo de sus negocios, evaluar la calidad y control de la gestión de riesgo, el sistema de control interno, el adecuado marco del gobierno corporativo o cooperativo, verificar la veracidad de la información que generan y los demás aspectos que garanticen el adecuado funcionamiento de las entidades y del sistema, el interés general y la protección de los derechos de los usuarios y/o clientes.”;*

Que, el inciso segundo del artículo 146 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece: *“La Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales.”;*

Que, el literal b) del artículo 147 de la Ley ut supra determina como atribución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria *“b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control,”;*

Que, los literales b) y g) del artículo 151 de la mencionada Ley, establecen como atribuciones del Superintendente de Economía Popular y Solidaria: *“b) Dictar normas de control,” y, “g) Delegar algunas de sus facultades siempre en forma concreta y precisa, a los funcionarios que juzgue del caso,”;*

Que, conforme consta en el literal j) del numeral 1.2.1.2 “Gestión General Técnica”, del artículo 9 de la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGD-IGJ-001 de 31 de enero de 2022, que contiene el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es atribución y responsabilidad del Intendente General Técnico, dictar las normas de control, en el ámbito de su competencia; y,

Que, conforme consta de la Acción de Personal No. 1882 de 31 de agosto de 2022, la Intendente Nacional Administrativa y Financiera, delegada por la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, de conformidad con el literal (i) del numeral 3 del artículo 2 de la Resolución No. SEPS-IGDO-2020-002 de 17 de febrero de 2020, resolvió la “SUBROGACIÓN DE BRITO LÓPEZ PEDRO GERMÁN”, en las funciones del puesto de INTENDENTE GENERAL TÉCNICO, de

conformidad con lo que establece el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con el artículo 270 de su Reglamento General, desde el 3 de septiembre de 2022 al 11 de septiembre de 2022.

En ejercicio de sus atribuciones, resuelve expedir la siguiente:

NORMA DE CONTROL PARA LA GESTIÓN DE TESORERÍA EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, LAS ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA, CAJAS CENTRALES Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS.

SECCIÓN I

ÁMBITO Y OBJETO

Artículo 1. ÁMBITO.- Las disposiciones de la presente norma se aplicarán a las cooperativas de ahorro y crédito, a las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, las cajas centrales, y, a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS), en adelante “entidad o entidades”.

Artículo 2. OBJETO.- La presente norma tiene por objeto establecer los requerimientos mínimos que las entidades deben cumplir en la gestión de tesorería, a fin de permitir que ésta se desarrolle dentro de un marco normativo de supervisión.

SECCIÓN II

DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS SEGMENTOS 1, 2 Y 3, CAJAS CENTRALES, ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA Y CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS.

Artículo 3. DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.- Las entidades de los segmentos 1, 2 y 3, Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito, Cajas Centrales y la CONAFIPS para una adecuada gestión de tesorería deberán al menos contar con :

1. Procesos y procedimientos formales de administración integral de riesgos que permitan identificar, medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar las exposiciones de riesgo en las actividades de tesorería y evaluar los riesgos:
 - a.- De crédito o de contraparte;
 - b.- De mercado;
 - c.- De liquidez;
 - d.- Operacionales; y,
 - e.- Legales.

Al efecto, las entidades deberán tener especial cuidado en prevenir los riesgos de fraude interno, de fraude externo; y de lavado de activos conforme la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, su Reglamento General, las normas expedidas por la Junta de Política y Regulación Financiera y demás normativa pertinente;

2. Políticas para la gestión de tesorería;
3. Criterios de evaluación para la selección de emisores o contrapartes el cual deberá contener al menos un análisis de su situación financiera y su solvencia;
4. Límites de exposición al riesgo derivado de las actividades de tesorería, las mismas que deberán considerar perfiles de riesgo: por emisor, sector, tipo de instrumento financiero, plazos, entre otros; así como el establecimiento de límites por concentración por estos factores; y,
5. Contar con infraestructura tecnológica que les permita garantizar una adecuada gestión de tesorería.

Las actividades de tesorería deberán integrarse a la gestión de riesgo global de la entidad, en consistencia y de manera complementaria a las definiciones sobre los cupos y límites fijados para las diferentes operaciones así como incluirse en los respectivos planes de contingencia de la entidad.

Artículo 4. ORGANIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA.- Las entidades deberán contemplar una clara y adecuada separación de funciones en las actividades inherentes al área de tesorería, considerando el volumen y complejidad de las mismas; por lo que, contemplarán la siguiente estructura organizacional:

1. El **Front office** es el área encargada de la negociación, de las relaciones con los clientes o socios y de los aspectos comerciales de la tesorería;
2. El **Middle office o Unidad de Riesgos/administrador de riesgo** es el área encargada de medir y evaluar los riesgos, verificar el cumplimiento de las políticas y límites establecidos, efectuar los análisis de riesgos y de impactos, elaborar reportes sobre el cumplimiento de las políticas y límites y de los niveles de exposición de los diferentes riesgos inherentes a las operaciones de tesorería e informar de los mismos al Comité de Administración Integral de Riesgos.
De otra parte, el **Middle office** es el área encargada de gestionar, revisar, controlar, evaluar y reportar periódicamente las metodologías de valoración de instrumentos financieros y de medición de riesgos; y,
3. El **Back office** es el área encargada de los aspectos relacionados con la liquidación, la valoración, el registro contable y la conciliación de operaciones.

La política para la gestión de tesorería deberá establecer el grado de relacionamiento y coordinación que asegure la independencia entre las áreas.

Artículo 5. RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- El Consejo de Administración o el Directorio de la CONAFIPS, según el caso, deberá:

1. Aprobar el “*Manual de políticas y procedimientos para la gestión de tesorería*”, que contendrá la política de tesorería definida para la gestión del portafolio, los criterios de clasificación, las metodologías de valoración, la contabilización a ser utilizada, los procesos, los procedimientos y los controles necesarios para un funcionamiento y una gestión adecuada en las actividades de tesorería;
2. Revisar y monitorear la aplicación de la política para la gestión de tesorería establecida por la entidad;
3. Conocer y aprobar el informe de calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones;
4. Aprobar los límites para la toma de riesgos en las actividades de tesorería;

5. Aprobar las operaciones de tesorería por sobre los límites establecidos;
6. Conocer y disponer la implementación de las observaciones y las recomendaciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; y,
7. Establecer las reglas internas dirigidas a prevenir y sancionar conflictos de interés y asegurar la reserva de la información.

Artículo 6. RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.- El Comité de Administración Integral de Riesgos deberá:

1. Verificar la adecuada clasificación, valoración y registro contable de las inversiones; así como, el cumplimiento de los criterios establecidos en el “*Manual de políticas y procedimientos para la gestión de inversiones*”;
2. Analizar, evaluar, aprobar y presentar al Consejo de Administración o al Directorio en el caso de CONAFIPS, el informe de la Unidad o Administrador de riesgos, según corresponda, referido al cumplimiento de la política de inversiones y el estado del portafolio de inversiones;
3. Proponer los límites de exposición de riesgos para la aprobación del Consejo de Administración o del Directorio en el caso de CONAFIPS;
4. Informar al Consejo de Administración o al Directorio, según corresponda, mensualmente, sobre los niveles de riesgos y el desempeño del área de tesorería;
5. Reportar al Consejo de Administración o al Directorio, según corresponda, el incumplimiento de políticas, procesos, procedimientos, límites de exposición, operaciones poco convencionales o por fuera de las condiciones de mercado;
6. Aprobar y monitorear la implementación permanente de modelos y procedimientos de monitoreo de riesgos en las actividades de tesorería;
7. Recomendar al Consejo de Administración o al Directorio, según corresponda, la aprobación del “*Manual de políticas y procedimientos para la gestión de tesorería*” propuesto por el área de tesorería o la que realice las actividades de tesorería;
8. Evaluar los problemas derivados de incumplimiento de políticas, procesos y procedimientos para recomendar a los administradores de la entidad las medidas que correspondan;
9. Proponer al Consejo de Administración o al Directorio, según sea el caso, las políticas de administración de riesgos en las operaciones de tesorería; y,
10. Conocer y aprobar el informe trimestral sobre calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones.

Artículo 7. RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD DE RIESGOS Y DEL ADMINISTRADOR DE RIESGOS.- El Responsable de la Unidad o Administrador de Riesgos deberá presentar al Comité de Administración Integral de Riesgos, respecto de la actividad de tesorería:

1. Informes de riesgos sobre evaluaciones previas de la contraparte a efectos de recomendar las operaciones a realizarse en tesorería;
2. Informe sobre las exposiciones asociadas a la gestión de tesorería;
3. Informes sobre las posiciones en riesgo, el incumplimiento de los límites establecidos y los resultados de las negociaciones. Estos informes contendrán las exposiciones por tipo de riesgo, por unidad de negocio y por portafolio, así como los límites establecidos (contraparte, instrumento, actividad, sector) y su grado de utilización, que permitan cuantificar los efectos de las posiciones sobre los resultados del ejercicio, patrimonio y el perfil de riesgo de la entidad; y,

4. Modelos y procedimientos de monitoreo de riesgos en las actividades de tesorería.

Artículo 8. DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE TESORERÍA.- El Manual de políticas y procedimientos para la gestión de tesorería deberá contemplar por lo menos lo siguiente:

1. Disposiciones sobre confidencialidad de la información, manejo de información privilegiada y conflictos de interés, de acuerdo al código de ética y comportamiento de la entidad;
2. Las funciones y los niveles de responsabilidades de los administradores, funcionarios y empleados involucrados en el desarrollo de las actividades de tesorería, incluyendo el personal de la unidad de administración integral de riesgos o el administrador de riesgos, según corresponda, y el personal encargado de las funciones operativas de las áreas de soporte;
3. La naturaleza, el alcance y el soporte legal de las actividades de la tesorería;
4. Los negocios estratégicos en los que actuará la tesorería;
5. Los mercados en los cuales la entidad tiene permitido actuar;
6. Procedimientos sobre la custodia de los instrumentos de inversión que contengan sistemas de seguridad, políticas de reserva de información; así como adecuados sistemas de control interno;
7. Los lineamientos para identificar, medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar los riesgos particulares de las actividades de la tesorería;
8. Los límites de las posiciones en riesgo a nivel de mercado, tipo de instrumento, contraparte, moneda, entre otros; así como los cupos operativos por funcionario o unidad de negocio dentro de la tesorería;
9. El procedimiento a seguir en caso de sobrepasar los límites o de enfrentar cambios fuertes e inesperados en el mercado, adoptando un plan de contingencia; así como un plan de desinversión;
10. Los sistemas de control interno y monitoreo de riesgos;
11. La plataforma tecnológica y el equipo técnico de la entidad para las operaciones de tesorería;
12. Los tipos y la periodicidad de los reportes gerenciales y contables, internos y externos;
13. Las sanciones por incumplimiento de las políticas dictadas;
14. Los límites y controles con respecto a las negociaciones de tesorería con partes relacionadas;
15. Niveles de concentración por emisor, sector, tipo de instrumento financiero, plazos, entre otros;
16. Las políticas de subcontratación de procesos relacionados con el área de tesorería; y,
17. La política de manejo operacional del efectivo.

El Manual de políticas y procedimientos para la gestión de tesorería deberá revisarse y actualizarse de forma permanente, de tal forma que sus lineamientos, procesos y procedimientos se ajusten al mercado.

Artículo 9. LÍMITES DE EXPOSICIÓN.- Las entidades determinarán límites de exposición que considerarán las pérdidas máximas, la exposición del patrimonio técnico constituido, los cupos de operación asignados a las unidades involucradas en la actividad de tesorería, el volumen y la complejidad de las operaciones de la entidad. Al efecto establecerán:

1. Límites generales para exposiciones a los riesgos de crédito o contraparte; de liquidez; y, de mercado, incluyendo cada uno de los factores de riesgo: tasa de interés, tipo de cambio y precio;
2. Límites por mercado, tipo de instrumento, contraparte, moneda, operación, entre otros, dejando prevista su agregación a nivel de portafolio, unidad de negocio y posición global de la tesorería; y,
3. La totalidad de exposiciones que se mantenga con una determinada contraparte, incluyendo operaciones dentro y fuera de balance.

El análisis a través del cual se determinaron los límites de exposición debe ser documentado adecuada y oportunamente; y, revisado y/o calibrado de forma periódica, al menos una vez al año. Esto constará expresamente en el *Manual de políticas y procedimientos para la gestión de tesorería*.

Los límites, sus actualizaciones o cambios deben ser conocidos de forma oficial por los funcionarios encargados de las negociaciones, asimismo, los *traders* u operadores deben ser informados semanalmente sobre los cupos operativos para ese período, y diariamente sobre el nivel actual de utilización de dichos cupos.

El control del cumplimiento de los límites de riesgo debe ser monitoreado por la unidad de administración integral de riesgos o administrador de riesgos. El área de auditoría interna deberá hacer una verificación de este control.

Los procedimientos relacionados con el control, el monitoreo, la autorización especial y el incumplimiento de los límites fijados también deben estar documentados.

Para la participación con nuevos activos financieros se deberá contar con la autorización del Consejo de Administración o el Directorio, según sea el caso, con base a las recomendaciones realizadas por el Comité de Administración Integral de Riesgos.

Artículo 10. DEL SISTEMA DE MEDICIÓN, MONITOREO Y CONTROL.- Las entidades deben tener un sistema de medición, monitoreo y control de los riesgos inherentes a la actividad de tesorería que corresponda al volumen y la complejidad de sus operaciones, probado en escenarios diferentes de tasas o precios que se ajuste a la realidad del mercado; y que brinde soporte y apoye el trabajo de la unidad de riesgos o el administrador de riesgos, según corresponda. Además, el sistema debe contemplar lo siguiente:

1. La estrategia de la entidad, las prácticas generales de transacción, así como las condiciones del mercado;
2. El control de límites de exposición, tanto a nivel individual como agregado; así como el control de los cupos operativos por *trader* u operador;
3. La cuantificación permanente de los riesgos de crédito o contraparte; liquidez; y mercado en cada uno de sus factores: tasa de interés, tipo de cambio y precio;
4. La disponibilidad de herramientas o modelos de simulación acordes al volumen y la complejidad de las operaciones, utilizando indicadores económicos y financieros que permitan evaluar, bajo diferentes escenarios, el impacto que las decisiones de tesorería tendrían en: las brechas de liquidez, el riesgo de tasa de interés, los resultados del ejercicio y la situación patrimonial de la entidad, entre otros;

5. La determinación del valor de las posiciones vigentes, mismas que de acuerdo al volumen y a la complejidad de las operaciones, deberán generar diferentes escenarios de tasas y volatilidades;
6. El control de lavado de activos y seguimiento de las operaciones inusuales de conformidad con la ley y la normativa expedida por la Junta de Política y Regulación Financiera;
7. El control por parte de áreas independientes a la tesorería, del cumplimiento de límites, saldos y cierres diarios contables; y,
8. La generación de reportes gerenciales, concisos pero completos, de monitoreo de riesgos que evalúen los resultados de las políticas y las estrategias e incluyan el resumen de las posiciones por contraparte e instrumento, producto y el cumplimiento de los límites.

El sistema de medición y control de los riesgos inherentes a las actividades de tesorería debe ser validado por la unidad de riesgos/ administrador de riesgo al menos una vez al año y probado en diferentes escenarios de tasas o precios, de forma tal que se ajuste a la realidad del mercado. El análisis de escenarios debe incluir sensibilización (*stress test*) para el “*peor escenario*”, de forma tal que la fijación de límites tenga en cuenta estos resultados. Adicionalmente, se debe evaluar el desempeño de los modelos de medición de riesgos (*backtesting*), confrontando lo ocurrido en la realidad con los resultados arrojados por el modelo durante un período determinado.

De manera complementaria a la gestión de los procesos operacionales de la tesorería para cada operación, éstas deberán ser validadas por la auditoría interna, incluyendo toda la documentación de soporte, así como la actualización de la misma.

Artículo 11. CONSIDERACIONES MÍNIMAS EN LOS ANÁLISIS POR TIPO DE RIESGO.- El manejo de la posición total de liquidez de las entidades, las políticas de gestión de tesorería y operación, aprobadas por el Consejo de Administración o el Directorio, en el caso de la CONAFIPS, deberán evitar las situaciones en las cuales la entidad sea incapaz de cerrar las operaciones en las condiciones pactadas inicialmente o incurra en costos elevados y/o excesivos para su cumplimiento.

Los cupos y límites fijados para las actividades de tesorería deben ser consistentes y complementarios con los cupos y límites establecidos para el portafolio de créditos, inversiones y demás productos semejantes o complementarios; así como con la estrategia de negocio de la entidad y su exposición al riesgo.

Las entidades en las políticas de la gestión de liquidez que emitan deberán considerar todas las posiciones que adquiera y manejen; sin perjuicio de dar cumplimiento a las disposiciones del Manual de administración integral de riesgos y a la normativa vigente.

SECCIÓN III

DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA EN LAS COOPERATIVAS DE LOS SEGMENTOS 4 Y 5

Artículo 12. Lineamientos para la gestión de tesorería.- En las cooperativas de los segmentos 4 y 5, la gestión de tesorería deberá estar orientada a:

1. Establecimiento de límites de exposición al menos por emisor;
2. Establecimiento de concentración;
3. Segregación de funciones en las actividades de tesorería; y,
4. Elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Tesorería que contemple al menos:
 - a. Disposiciones sobre confidencialidad de la información, manejo de información privilegiada y conflicto de intereses de acuerdo al código de ética y comportamiento;
 - b. Las funciones y las responsabilidades involucradas en las actividades de tesorería;
 - c. Mercado en el cual la entidad tiene permitido actuar;
 - d. Procedimientos sobre custodia de documentos de inversión con las respectivas seguridades y controles;
 - e. Límites de exposición;
 - f. Sistemas de control y monitoreo; y,
 - g. Sanciones por incumplimiento.

Artículo 13. Responsabilidades de las entidades de los segmentos 4 y 5.- Los órganos internos de dichas entidades, a más de las responsabilidades previstas en las “Normas para la Administración Integral de Riesgos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Centrales y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda” expedida por la Junta de Política y Regulación Financiera, tendrán las siguientes:

1. El Consejo de Administración será responsable de aprobar el Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Tesorería propuesto por el área que realice actividades de tesorería;
2. El Consejo de Vigilancia deberá revisar el cumplimiento de la aplicación de los procesos aprobados por el Consejo de Administración para las actividades de tesorería; y,
3. El representante legal hará cumplir lo establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Tesorería.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las entidades controladas deberán mantener en todo momento y a disposición de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la información referente a la gestión de tesorería.

SEGUNDA.- Si en procesos de supervisión y control, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria determinare que existen debilidades importantes en la gestión de actividades de tesorería, así como el incumplimiento de las políticas definidas para el efecto, dispondrá la constitución de provisiones adicionales para las operaciones de tesorería y la desinversión inmediata de estos títulos valores.

TERCERA.- Auditoría Interna o el órgano que haga sus veces evaluará trimestralmente, en el caso de las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, caja central y Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias; y, semestralmente en las cooperativas del segmento 4 y 5, el cumplimiento de esta norma.

CUARTA.- Los casos de duda en la aplicación de la presente resolución de control serán resueltos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las entidades deberán aprobar el Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Tesorería dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente norma.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Publíquese en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE.- Dada y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 7 de septiembre de 2022.

PEDRO GERMÁN BRITO LÓPEZ
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO SUBROGANTE